

COLOMBIA EN CRISIS

La crisis del gobierno de Ernesto Samper por las filtraciones de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial, que lo tienen al borde de una renuncia, ha llevado a todo el régimen a la más grave inestabilidad de este siglo. Más allá del retiro o la permanencia del presidente en su cargo, lo que se evidencia hoy en Colombia es un quiebre en el sistema político bipartidista, clientelista y corrupto que prevalece desde hace más de cincuenta años.

CRISIS DE PARTIDOS

La debilidad del sistema bipartidista —eje de la vida política desde el siglo pasado— se hizo patente en las pasadas campañas presidenciales. El propio Ernesto Samper, candidato del Partido Liberal, debió enfrentarse a una colectividad dividida, sin el apoyo de los caciques regionales por el manejo tecnocrático que se le dio a la campaña y con una fuerte oposición por parte del sector neoliberal, que creía que Samper desmontaría sus proyectos económicos. Además, los cambios en el sistema político introducidos por la constitución de 1991, que separó las elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente, encarecieron las elecciones y obligaron a los partidos a movilizar las maquinarias para cada sufragio. Todos estos elementos llevaron a que la campaña del actual presidente gastara casi once mil millones de pesos, de los cuales 3.000 millones podrían haber sido entregados por el cartel de Cali.

LA NARCOPOLITICA

Esta no es, sin duda, la primera vez que la mafia influye en la elección de funcionarios públicos en Colombia. Sin embargo, los antecedentes de violencia, corrupción y caos que están atados a la historia del narcotráfico en Colombia hicieron que, cuando aparecieron las pruebas que empezaban a implicar al presidente Samper con los así llamados dineros calientes, gran parte de la sociedad colombiana abandonara su tradicional silencio y exigiera un cambio radical en la forma de hacer política. El mon-

to de la cifra entregada por los narcotraficantes, el grado de compromiso del gobierno con la mafia que podía implicar este hecho y la especial sensibilidad que tiene actualmente la sociedad colombiana con respecto a los narcotraficantes hizo que la situación se le pusiera especialmente difícil a Ernesto Samper.

A este panorama se le une el aumento de la presión estadounidense, que busca que Colombia se alinee en su política antinarcóticos, una vez que el narcotráfico reemplazó al comunismo como el enemigo de la civilización occidental. La necesidad norteamericana de sostener su aparato de seguridad nacional y el posible compromiso del gobierno colombiano con la mafia hicieron que las agencias de seguridad incrementaran su acción en el país y que las autoridades de Estados Unidos volvieran a plantear temas como la extradición y la extraterritorialidad.

CRISIS EN LAS ELITES Y EN LA SOCIEDAD CIVIL

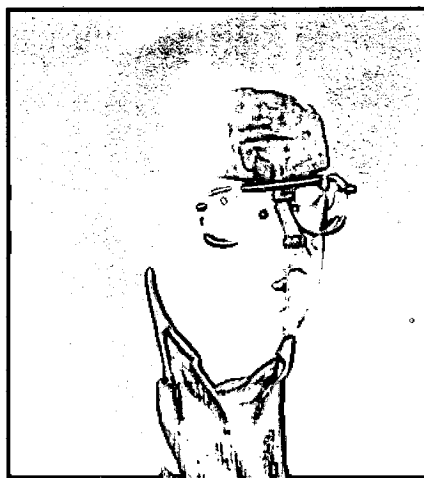
El estallido de este escándalo rompió la tradicional solidaridad de cuerpo que sostenía a la clase política, e incluso las lealtades partidistas se han debilitado notoriamente. Esto se evidencia en las declaraciones dadas por políticos implicados en el proceso 8000 como el exministro de defensa Fernando Botero o la senadora liberal María Izquierdo, quienes han acusado abiertamente a sus antiguos amigos y compañeros. El enfrentamiento directo entre el gobierno Samper y sus opositores, quienes han involucrado al presidente en la llegada de dineros del narcotráfico a su campaña, ha llenado el proceso de verdades a medias y mentiras, e incluso, de ataques personales. La división que se da en los miembros de la clase política ha sido interpretada por el gobierno como una "conspiración" para desmontar el programa social de corte progresista que Samper prometió desarrollar. Diversas voces opositoras han desestimado este argumento y se han opuesto a la sugerencia gubernamental de hacer una con-

sulta popular para relegitimar al Presidente y a la vez pedir el apoyo popular al plan de desarrollo social. Sobre este punto trató la carta firmada hace algunas semanas por cuatro ex-presidentes liberales en la que piden que, en caso de que se dé la renuncia del presidente Samper, se garantice la continuidad de su plan de gobierno. Esta polarización, sin embargo, también ha llegado a la población, que, según muestran las encuestas, está casi dividida equivalentemente entre quienes opinan que Ernesto Samper debe renunciar y quienes apoyan su permanencia. Diferentes sectores de la sociedad civil han iniciado campañas para exigir la renuncia del presidente, posición que ha sido apoyada por la mayoría de los gremios económicos, algunos movimientos femeninos y estudiantiles, y ciertos sectores de la izquierda. Otros, sin embargo, como las centrales obreras y sectores populares, han marchado para apoyar al presidente Samper.

La fuerte posición tomada por gremios y otros sectores económicos está originada en la posibilidad de que la crisis política tenga una negativa ingerencia en el desarrollo de la economía nacional; especialmente si el país pierde la Certificación que Estados Unidos debe expedir a Colombia el próximo marzo, y que está condicionada a la evaluación que el Congreso norteamericano haga de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Esto pondría obstáculos al comercio bilateral, eliminaría algunos beneficios tributarios y dificultaría el acceso a nuevos créditos por parte de las agencias internacionales como el Banco Mundial o el BID.

EL DEBATE PUBLICO

En este escenario, la crisis de legitimidad del régimen ha llegado a sus más altos niveles. La problemática alrededor de Samper ha trascendido los límites de su participación con el caso. Después de que el proceso constituyente de 1991, que culminó con la redacción de una nueva constitución, devolvió en parte la



fe en las instituciones políticas, de nuevo existe hoy la convicción generalizada de que el Estado colombiano es irremediablemente corrupto. Por eso, la fiscalía, a cargo de Alfonso Valdivieso, ha sido crucial en el proceso que vive Colombia no sólo en el plano judicial. Actualmente es la única institución que tiene la legitimidad frente a los colombianos, pues ha dado muestras de independencia al tratar con intereses que siempre habían sido considerados intocables. Sin embargo, algunos sectores han criticado su tendencia hacia la "Justicia espectáculo", pues consideran que detrás de ella se esconden intereses personales de proyección política.

Y es que el "proceso 8000" —llamado así por el número de radicación del expediente— ha copado la atención total del país en los últimos meses. Los colombianos ven cada día los noticieros como si siguieran los capítulos de una telenovela, pues los medios de comunicación han jugado un papel crucial en el desarrollo de este proceso. Desde agosto de 1994 la prensa ha publicado continuamente testimonios de testigos y documentos claves en la investigación, lo cual ha enfrentado al gobierno con miembros de la Fiscalía, pues acusan al cuerpo investigador de filtrar documentación a la prensa. Sin embargo, la Fiscalía ha recibido el apoyo de amplios sectores para que continúe con su labor. Así, se abrió el debate en torno a la imposibilidad de mantener la reserva sumarial en casos como éste, en que es de interés público el desarrollo del proceso.

SALIDAS POSIBLES

El presidente Samper había respira-

do tranquilo cuando la comisión de acusaciones del Congreso —único cuerpo habilitado por la constitución para juzgar al Presidente— se declaró inhibida para abrirle un proceso formal a Samper, por falta de pruebas contundentes. Sin embargo, el hecho de que su juez —el parlamentario Heyne Mogollón— fuera parte del Partido Liberal y activo miembro de su campaña generó mucho malestar en el país. La tranquilidad con la que soñaba el Presidente, sin embargo, no llegó. Con la encarcelación de políticos que lo rodearon anteriormente y la aparición continua de nuevos indicios, además de la decisión de colaborar con la justicia de allegados personales del presidente, se ha enturbiado aún más el panorama, y se ha demostrado que éste, más que un juicio jurídico, tiene un claro tinte político. La convocatoria del Presidente a sesiones extraordinarias del Congreso, para promover su juicio político por parte de este organismo, terminó en un estruendoso aplauso al Presidente por parte de los parlamentarios liberales al final de su discurso inaugural, el retiro de la bancada conservadora y el inicio de una huelga de hambre de dos congresistas que exigen cambios en la Comisión de Acusaciones. La decisión del fiscal Valdivieso de elevar denuncia penal contra el Presidente en esta comisión y la sugerencia hecha por algunos obispos de la posibilidad de que Samper solicite una licencia temporal mientras se aclara su situación, indican que la crisis va a complicarse aún más.

Con todas estas piezas sobre la mesa, nadie se atrevería a garantizar un final. Aunque tiene mucho en su contra, es posible que el presidente Samper se mantenga en el poder hasta 1998. De ser así, Colombia seguramente se enfrentará a otros dos años de gran inestabilidad interna, con un primer mandatario ocupado fundamentalmente en su defensa, y con un aparato estatal que no consigue dar curso a los programas gubernamentales. Además, la presión internacional, especialmente la estadounidense, continuará obstaculizando el normal curso no

Encuentro de Creadores

NATURALEZA, ARTE Y FRONTERAS

MANIFIESTO

sólo del comercio exterior sino también la presencia colombiana en los foros internacionales. En este caso también se podría temer por una polarización aún más aguda del conflicto y la reaparición de los fenómenos violentos que ya el país conoce.

La eventual renuncia del presidente Samper debería estar mediada por un fuerte proceso de negociación en el que influyen muchos factores. En primer lugar, la factibilidad de que asuma el poder el vicepresidente Humberto De La Calle es criticada desde el plano ético por varios sectores que insisten en que su elección está igualmente viciada. Además, el mismo Samper no ha dado muestras de aceptar esta solución por la cercanía de De La Calle al ex-presidente César Gaviria, quien ha sido uno de los más fuertes opositores al gobierno Samper. Si se descarta el ascenso del vicepresidente, el Congreso de la República sería el encargado de escoger un sucesor. El inmenso desprestigio del Congreso, sin embargo, por su tradicional manejo clientelista y los procesos penales y de investigación que se llevan en contra de varios de sus miembros, ha hecho que se ponga en duda la legitimidad de esta posibilidad. A pesar de lo anterior, éstas son las salidas más probables a la crisis institucional que atraviesa Colombia, suponiendo que los militares decidan mantener su lealtad a la presidencia, como lo han manifestado hasta el momento. De lo que no hay duda es de que el "proceso 8000" marca desde ya un hito en el desarrollo político colombiano, no sólo por las implicaciones concretas que éste tenga en el Estado, sino porque hizo obvia la necesidad de dar inicio a un proceso educativo democrático y la recuperación de la dignidad de la política, por medio de profundas transformaciones en la manera como se tiene acceso al poder y por la responsabilidad que deben adquirir aquellos encargados de manejar lo público. ■

Renata Segura Bonet es Investigadora del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), de Santa Fe de Bogotá.

Nosotros, creadores en todas las disciplinas del arte, convocados por la Asociación Civil AMARIBA a participar en el Encuentro de Creadores NATURALEZA, ARTE Y FRONTERAS, realizado en la Gran Sabana, del 3 al 12 de noviembre del año 1995, y conjuntamente con representantes de la etnia pemón y pioneros ecologistas de la zona, buscadores todos de vida y no de oro, de pie al borde del Woypantepuy, en el lugar conocido como El Abismo, ubicado en el corazón mismo del Macizo Guayanés y ante la sobrecogedora inmensidad de la Selva Amazónica, queremos compartir con el país esta angustia que nos abruma por la inminente destrucción de la riqueza natural de Venezuela.

Nosotros, deslumbrados desde siempre por el brillo de la selva, que es oro verde regulador de cursos de agua y albergue de todas las criaturas, hemos visto, con el horror de quien mira su futuro arrebatado por mercenarios, el creciente y desolador proceso de devastación, desertización y envenenamiento por mercurio y cianuro al que la minería y el fuego han sometido a la Gran Sabana y, más específicamente, a la Cuenca Alta del Río Caroní, fuente generadora del agua que alimenta a la omnipresente Represa de El Guri, actualmente en un peligro cierto de colapso de su funcionamiento bajo cuya amenaza nos encontramos todos los venezolanos.

Nosotros, finalmente, en ejercicio pleno de nuestro derecho a la esperanza y a la participación, alejados de todo interés económico o partidista, y contando con la solidaridad de los artistas brasileños y colombianos que nos acompañaron en este Encuentro con lo más bello y con lo más terrible, manifestamos nuestro total desacuerdo con la actividad minera que actualmente se desarrolla en la Gran Sabana, promovida por los distintos gobiernos e intereses personales de venezolanos y extranjeros, amparados en muchos casos por una apariencia de legalidad que cambia por oro la vida misma de los indígenas y otros pobladores de las selvas del sur de Venezuela, así como el agua, los bosques y la fauna de la Gran Sabana y, por si fuera poco, la electricidad que produce la Represa de El Guri. Antes de que sea ya tarde, el país en su totalidad debe conocer y compartir una verdad cuyo tamaño coincide con el tamaño de nuestro futuro. **EL AGUA y LA BIODIVERSIDAD SON EL GRAN RECURSO ECONOMICO DE LA GRAN SABANA Y DE LA SELVA;** no así el oro y los diamantes como nos quieren hacer creer.

Hágase extensivo este Manifiesto a todas las organizaciones ecologistas internacionales.

Lucía Agudelo	Víctor Hernández	Cristina Policastro
María Auxiliadora Alvarez	Miguel Issa	Gonzalo Ponte
Bernardo Angel Saldarriaga	Alecia Linke	María Elena Ramos
Vicente Arreaza (Kalkutsé)	Pedro Linke	Alí Rangel
Mercedes Blanco	Ana María Mazzei	Sonia Rodríguez
Alecia Castillo	Marlene Murillo de Lucas	Fliakin Rufino
Iván Castillo	Laura Nazoa	Anna Sartorio de Ponte
Renato Costa	Nela Ochoa	Mauricio Siso
Massimo Dotta	Tita Ortiz	Roempler Vaamonde
Mariela Garcés	Juan Carlos Paisán	Fruto Vivas
Josefina García de Abaunza	Andrés Parada	Benito Yrady
Jennifer Hackshaw	Neiffe Peña	Pedro León Zapata